

Informe de Análisis Estratégico
Elecciones en Colombia | Julio 2025
Unidad de Análisis Prospectivo

Introducción

Colombia se aproxima a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026 en un contexto político marcado por tensiones institucionales, narrativas polarizantes y un entorno de seguridad cada vez más complejo. A poco más de un año de la cita en las urnas, se han identificado señales tempranas que ameritan una evaluación estructurada del riesgo electoral, con el fin de anticipar escenarios y orientar decisiones estratégicas tanto en el ámbito público como privado.

Las declaraciones del presidente Gustavo Petro expresando desconfianza sobre las elecciones de 2026, ha generado reacciones institucionales, gremiales y políticas, en las que se reafirma la solidez del sistema electoral colombiano pero también se evidencian las tensiones entre ramas del poder y actores clave del proceso.

En paralelo, se observa un deterioro sostenido del entorno de seguridad. De acuerdo con la Misión de Observación Electoral (MOE), 2025 registra el mayor número de incidentes armados contra actores políticos desde 2018, lo que representa una amenaza directa a la participación ciudadana y a la integridad del proceso democrático, especialmente en territorios donde persiste la presencia de actores armados ilegales.

A lo anterior se suman dinámicas institucionales que han tensado el equilibrio entre poderes, como la aprobación de reformas controversiales, el uso de mecanismos extraordinarios para tramitar iniciativas legislativas, y debates normativos que afectan la libertad de información en el marco electoral. Si bien no existen señales concluyentes de una alteración al calendario democrático, la convergencia de estos factores plantea escenarios de incertidumbre que deben ser monitoreados con atención.

Este informe presenta un análisis estructurado de los factores de riesgo que podrían incidir en el entorno político e institucional durante el ciclo electoral de 2026. Su propósito principal es contribuir a la reducción de la incertidumbre mediante la identificación de dinámicas relevantes y la exploración de posibles escenarios, con el fin de ofrecer insumos útiles para la planificación estratégica y la toma de decisiones informadas por parte de actores públicos, privados y de la sociedad civil.





Riesgos

El proceso electoral de 2026 en Colombia se desarrolla en un contexto de creciente complejidad política y social. La combinación de desconfianza institucional, tensiones entre poderes del Estado, y un entorno de seguridad frágil ha generado condiciones que requieren una lectura anticipada de riesgo. En este apartado se identifican y analizan tres factores críticos que, por su impacto potencial y probabilidad de ocurrencia, merecen especial atención por parte de los tomadores de decisión.

A continuación se presenta un análisis de los riesgos priorizados:

Riesgo Unificado	Impacto	Probabilidad	Justificación
Crisis de legitimidad electoral y posible desconocimiento del resultado en 2026	Muy alto	Baja	Petro está intentando erosionar la credibilidad del sistema electoral, incluso antes del inicio formal del proceso. Su narrativa conspirativa y la tensión con Thomas Greg & Sons sugiere el riesgo de que él o sus seguidores desconozcan los resultados. Aunque no hay señales de reversa en esta estrategia, tampoco hay señales claras de que su credibilidad pueda sostenerse en el tiempo.
Violencia electoral y debilitamiento de la participación ciudadana	Alto	Media	Hay datos concretos: 979 incidentes armados y 134 ataques a políticos en 2025. La MOE advierte que esto puede escalar aún más en 2026. La desinformación y el miedo podrían generar abstención o incluso coerción electoral, intentando deslegitimar el proceso. No se descarta un efecto contrario a los intereses del petrismo en centros urbanos.



Escalada del conflicto institucional entre el Ejecutivo y actores clave del sistema democrático	Medio	Alta	Petro mantiene una actitud de confrontación con la Registraduría, gremios, Congreso, CNE y medios. La tensión podría transformarse en obstrucciones institucionales o crisis de gobernabilidad si no se moderan los discursos. Aún no es irreversible, pues la institucionalidad está respondiendo de manera oportuna y clara, pero la tendencia del gobierno se mantiene.
--	--------------	-------------	--

Análisis de Hipótesis Competidoras

Para reducir la incertidumbre inherente al entorno electoral y mitigar sesgos analíticos, este informe aplica la metodología de Análisis de Hipótesis Competidoras (ACH). El objetivo principal es contrastar explicaciones alternativas sobre la conducta del Gobierno y otros actores clave frente al proceso electoral de 2026, evaluando de manera sistemática qué tan bien cada hipótesis se ajusta a la evidencia disponible.

El ejercicio se estructura en tres pasos: (1) formulación de hipótesis mutuamente excluyentes pero plausibles, (2) mapeo de evidencias relevantes—tanto consistentes como contradictorias—para cada hipótesis, y (3) valoración comparativa que prioriza la explicación con mayor respaldo empírico. Este enfoque facilita a los tomadores de decisión una visión clara de los supuestos críticos, las brechas de información y los posibles puntos de inflexión que podrían alterar la trayectoria actual del proceso electoral.

El análisis parte de tres hipótesis competidoras que buscan explicar la conducta del presidente Gustavo Petro y su gobierno frente al sistema electoral colombiano en el marco de las elecciones de 2026. Estas hipótesis se diferencian en su grado de intencionalidad, su impacto institucional esperado y la profundidad de los efectos que podrían generar:

- **Hipótesis A (Ha):**

Petro está ejecutando una estrategia deliberada, sistemática y sostenida para deslegitimar el proceso electoral de 2026, con el objetivo de condicionar, desconocer o incluso impedir el resultado si este no le es favorable, apelando a una narrativa de conspiración y persecución institucional.



- **Hipótesis B (Hb):**

Petro utiliza una retórica confrontacional como táctica política para movilizar su base y deslegitimar a sus adversarios. Esta narrativa puede generar un clima de polarización, desinformación y erosión de confianza institucional que tenga efectos adversos no planeados.

- **Hipótesis C (Hc):**

La estrategia discursiva del gobierno no representa una amenaza real al proceso electoral ni a la institucionalidad. Las declaraciones de Petro son retóricas, responden a la coyuntura y no tienen efectos estructurales sobre la estabilidad democrática.

Evidencia	Ha	Hb	Hc	Observación clave
Petro afirma “desconfío de las elecciones de 2026”	Consistente	Consistente	No consistente	Ataque directo al proceso electoral; no se trata de una queja menor.
Narrativa de “resistencia institucional” hacia 2026	Consistente	Consistente	No consistente	Recurrente en sus intervenciones; implica ruptura simbólica.
Petro fue electo bajo el mismo sistema que ahora cuestiona	No consistente	Consistente	Consistente	Debilita la tesis de ruptura total, muestra contradicción discursiva.
Incremento de violencia política en 2025 y ataques a candidatos	Consistente	Consistente	No consistente	Aunque no es impulsada por el gobierno, favorece escenarios de tensión.



Petro no propone reelección ni aplazamiento, pero su gabinete sí y no los desautoriza.	Consistente	Consistente	No consistente	No hay acciones formales que apunten a sabotaje institucional.
Gremios, Registraduría y exfuncionarios defienden el proceso electoral	No consistente	Consistente	Consistente	La respuesta institucional ha sido clara y sólida.
Narrativas de complot (junta del narcotráfico, atentados, etc.)	Consistente	Consistente	No consistente	Alimenta una visión de cerco al poder, típica de escenarios extremos.
Tensiones en el Pacto Histórico	No consistente	Consistente	Consistente	Indica conflicto político normal más que conspiración estructural.

Hipótesis A: Estrategia deliberada para desconocer el resultado

- **Consistencia parcial.** Hay elementos que apuntan a una narrativa estructurada de descrédito institucional y confrontación, con un patrón discursivo coherente. Sin embargo, **no hay evidencia clara de acciones que indiquen un intento real de impedir elecciones**, modificar el orden constitucional o desatar una crisis institucional premeditada.
- La mitad de las evidencias la contradicen, especialmente las relacionadas con las acciones institucionales del gobierno (apertura del software, respeto formal al calendario electoral).





Hipótesis B: Táctica confrontacional con efectos de erosión

- **Alta consistencia.** Esta hipótesis explica mejor la combinación de discursos agresivos, ataques a actores institucionales y ausencia de medidas formales para alterar el proceso. Petro busca movilizar emocionalmente a su base, marcar distancias con las élites y victimizarse frente al sistema. Aunque no hay intención directa de ruptura, **el efecto sí puede ser corrosivo para la confianza democrática.**
- Casi toda la evidencia respalda esta hipótesis, con solo una inconsistencia menor (la apertura del software, que podría verse como correctiva).

Hipótesis C: Retórica sin impacto estructural

- **Consistencia media-baja.** Aunque algunas evidencias (apertura del sistema, respuesta institucional, ausencia de acciones formales) refuerzan esta tesis, **la intensidad y reiteración del discurso de Petro, así como sus teorías conspirativas, la contradicen fuertemente.**
- Las acciones del Ejecutivo no son neutras ni irrelevantes: afectan la percepción pública y polarizan el clima electoral.

Análisis de ACH

Tras evaluar los elementos disponibles, la hipótesis que resulta más consistente con la evidencia observada es Hb: Petro está utilizando una táctica política polarizante y confrontacional, que no busca desconocer las elecciones formalmente, pero sí puede tener efectos secundarios graves sobre la confianza institucional, la estabilidad democrática y la participación ciudadana. La narrativa confrontacional del gobierno muestra un patrón coherente con fines políticos y comunicacionales, más que con una estrategia de ruptura institucional abierta. No obstante, sus efectos acumulativos sobre la percepción pública, la polarización y la legitimidad democrática sí representan riesgos relevantes.

La hipótesis A, aunque parcialmente respaldada por algunas evidencias, no encuentra un nivel suficiente de consistencia para afirmar que existe una intención clara y estructurada de desconocer el resultado electoral. Por su parte, la hipótesis C subestima el impacto real que los discursos y acciones del Ejecutivo pueden tener en un entorno institucional y social ya tensionado.



El comportamiento del Ejecutivo frente al proceso electoral parece estar guiado por una lógica política de confrontación y movilización simbólica más que por un plan institucional de ruptura. Sin embargo, esto no reduce su importancia estratégica. El potencial de erosión de la confianza pública, la desinformación electoral y el desgaste institucional asociado a esta estrategia constituye un factor de riesgo que debe ser monitoreado permanentemente.

Escenarios prospectivos

En contextos de alta incertidumbre como el actual ciclo electoral colombiano, la planificación estratégica requiere contemplar no sólo la evolución más probable del entorno, sino también trayectorias alternativas plausibles. Esta sección presenta cuatro escenarios prospectivos construidos a partir del cruce entre dos ejes críticos: **la intensidad de la confrontación institucional y la capacidad de respuesta del sistema democrático para preservar la legitimidad y la gobernabilidad.**

Los escenarios no deben entenderse como predicciones, sino como marcos analíticos que permiten anticipar riesgos, identificar señales de alerta y diseñar medidas de preparación diferenciadas. Cada uno incluye una caracterización general, su probabilidad estimada y sus implicaciones estratégicas.

ESCENARIO 1: Freno institucional

Las instituciones electorales y la sociedad civil se anticipan al deterioro y actúan con transparencia, pedagogía y garantías visibles. El discurso confrontacional de Petro continúa, pero pierde tracción frente a una ciudadanía que protege el proceso democrático y a una respuesta institucional coordinada.

Probabilidad: Media - baja

Consecuencias estratégicas:

- La participación electoral se mantiene robusta.
- Petro preserva su capital simbólico pero sin capacidad de desestabilizar.
- El Pacto Histórico se mantiene competitivo pero dentro del marco institucional.
- Se fortalece la confianza en las reglas democráticas a pesar del ruido político.





ESCENARIO 2: Desgaste institucional

La persistencia del discurso de crisis, la narrativa de fraude y el ambiente de polarización han erosionado la confianza ciudadana. Aunque la institucionalidad intenta responder, la combinación de retórica de fraude, violencia preelectoral y desinformación digital no permite contener del todo el creciente desencanto social. El discurso presidencial continúa con acciones de presión directa: señalamientos al CNE, confrontaciones con la Registraduría e intentos de modificar normativas mediante decretos. Aunque no se desconoce formalmente el resultado electoral, se instala un clima de alta tensión y judicialización del proceso. Sectores sociales, principalmente afines al gobierno, cuestionan o incluso desconocen los resultados.

Probabilidad: Alta

Consecuencias estratégicas:

- La desconfianza en el proceso electoral se instala en sectores del electorado, alimentada por la narrativa oficialista. El gobierno saliente deja un legado de conflictividad institucional sostenida y erosión de reglas compartidas.
- El resultado electoral, aunque legal, es cuestionado, lo que desencadena una crisis de legitimidad postelectoral. Surgen protestas, impugnaciones y un aumento en la judicialización del proceso.
- Se reactiva un “populismo opositor” que desconoce el nuevo mandato desde su origen, reproduciendo dinámicas de tensión.
- El nuevo gobierno hereda un entorno polarizado con limitada gobernabilidad y confrontación entre instituciones, además de una narrativa deslegitimadora.

ESCENARIO 3: Neutralización por agotamiento

La narrativa de crisis se desgasta internamente. El petrismo entra en un proceso de fragmentación debido a divisiones entre sectores radicales y moderados. La figura de Petro pierde influencia simbólica en la recta final del mandato, tanto por el desgaste discursivo como por la desconexión con su base electoral. La sociedad civil y los medios desplazan la agenda presidencial, centrando el debate en propuestas programáticas y en garantías electorales reales.



**Probabilidad: Media****Consecuencias estratégicas:**

- El Pacto Histórico no logra mantener el control del ejecutivo. El nuevo gobierno proviene de la oposición o sectores moderados.
- Se reduce la intensidad de la polarización política, aunque no desaparece.
- El nuevo gobierno asume sin una victoria aplastante, pero con margen para reconstruir confianza institucional.
- Petro termina su mandato sin lograr capitalizar una narrativa de resistencia, y su rol se diluye en la oposición.

ESCENARIO 4: Ruptura constitucional**Lógica:**

El conflicto institucional escala de forma incontrolada. Petro denuncia un “fraude estructural” y convoca a movilizaciones nacionales para impedir el cierre del proceso. El gobierno recurre a medidas de excepción (decretos extraordinarios, reformas de emergencia, o incluso desobediencia constitucional), alegando un “estado de resistencia popular”. La fuerza pública y el Congreso se dividen. El calendario electoral se altera o se suspenden elecciones.

Probabilidad: Muy baja**Consecuencias estratégicas:**

- Colapso de la legitimidad democrática.
- Interrupción del calendario electoral o imposibilidad de transición institucional ordenada.
- Pronunciamientos de organismos internacionales, presión diplomática y posible sanción de actores multilaterales.
- Crisis de gobernabilidad severa con potencial de violencia generalizada.
- Se reactiva un ciclo de movilización de “doble poder”: instituciones formales vs. legitimidad popular autoproclamada.

Los escenarios prospectivos presentados muestran un amplio rango de trayectorias posibles en el camino hacia las elecciones de 2026, desde desarrollos institucionalmente



controlados hasta eventuales crisis de legitimidad o rupturas del orden constitucional. Si bien el escenario más probable no implica una alteración directa del proceso electoral, los niveles actuales de tensión política, confrontación discursiva y fragilidad institucional exigen una vigilancia constante y una preparación diferencial ante eventos disruptivos.

Para los distintos sectores —institucionales, empresariales, sociales e internacionales—, estos escenarios ofrecen un marco para anticipar impactos, fortalecer capacidades de respuesta y diseñar rutas de acción ajustadas a cada posible contexto. La anticipación estratégica no consiste en predecir el futuro, sino en reducir su incertidumbre, aumentar el margen de maniobra y minimizar los costos ante eventualidades críticas.

El monitoreo continuo de señales tempranas, la articulación de actores democráticos y la protección de los principios institucionales serán factores determinantes para evitar transiciones traumáticas y preservar la gobernabilidad durante y después del ciclo electoral.

Alertas Tempranas e Indicadores de Monitoreo

El monitoreo continuo del entorno político, institucional y de seguridad es clave para anticipar desviaciones relevantes en el curso del proceso electoral y activar mecanismos de respuesta oportuna. A continuación se presentan **señales de alerta** e **indicadores estratégicos** asociados a cada uno de los riesgos y escenarios evaluados, que deben ser observados de forma periódica por equipos de análisis y toma de decisiones.

1. Crisis de legitimidad electoral

Señales de alerta:

- Incremento en la frecuencia y severidad de declaraciones oficiales que cuestionan la legalidad del proceso electoral o sus operadores, especialmente por parte del Presidente Petro.
- Instalación generalizada de narrativas de fraude sin sustento técnico verificable.
- Desconocimiento anticipado de decisiones del Consejo Nacional Electoral, Registraduría o instancias judiciales.
- Llamados a movilizaciones permanentes en torno a la “defensa del voto”.



**Indicadores de monitoreo:**

- Nivel de confianza ciudadana en el sistema electoral (encuestas de opinión).
- Tráfico en redes sociales asociado a términos como “fraude”, “manipulación”, “golpe electoral”.
- Posiciones públicas de los partidos políticos frente a la transparencia del proceso.
- Aumento en la frecuencia y la contundencia de las declaraciones de funcionarios públicos que ponen en duda la confianza en el proceso electoral.

2. Violencia electoral**Señales de alerta:**

- Aumento sostenido de ataques o amenazas contra precandidatos, campañas o autoridades locales.
- Declaraciones de grupos armados ilegales sobre su postura frente a las elecciones.
- Restricciones al acceso de misiones de observación electoral en territorios priorizados.

Indicadores de monitoreo:

- Número de hechos violentos contra actores políticos (datos MOE, Indepaz, Defensoría).
- Municipios con alta inscripción atípica de cédulas.
- Zonas bajo alerta temprana por parte de los sistemas de monitoreo electoral.

3. Confrontación institucional**Señales de alerta:**

- Escalamiento del conflicto entre el Ejecutivo y órganos de control o del sistema electoral.
- Propuestas de reformas constitucionales de última hora o convocatorias a mecanismos extraordinarios (constuyente, consulta, etc.).
- Acciones de altos funcionarios que impliquen desobediencia institucional.
- Acciones orientadas a afectar el libre desarrollo del proceso electoral, tales como la retención de recursos o el condicionamiento a su desembolso, intentos por modificar el calendario electoral, presionar a autoridades electorales, o interferir en la logística y operación del proceso.





Indicadores de monitoreo:

- Nivel de conflictividad en las sesiones del Congreso sobre temas electorales.
- Frecuencia de choques jurídicos entre ramas del poder público.
- Reacción de organismos internacionales frente al funcionamiento institucional.

Recomendaciones

La presente sección recoge un conjunto de recomendaciones orientadas a fortalecer la capacidad de anticipación, adaptación y respuesta frente a los riesgos identificados en el entorno electoral de cara a 2026. Estas acciones están diseñadas para apoyar a los tomadores de decisión en la construcción de escenarios de preparación, protección institucional y resiliencia operativa.

Las recomendaciones parten del reconocimiento de que, aunque el sistema democrático colombiano conserva importantes elementos de solidez, enfrenta tensiones acumulativas que podrían escalar bajo determinadas condiciones. Por tanto, no se trata únicamente de responder a amenazas inmediatas, sino de generar condiciones estructurales que reduzcan la vulnerabilidad, refuercen la legitimidad de los procesos y garanticen una transición política ordenada, incluso en entornos altamente polarizados. En este sentido, las principales recomendaciones en este caso son:

1. Mantener una postura institucional activa y visible

- Reafirmar públicamente el compromiso del sector empresarial con la democracia, el Estado de derecho y el respeto a los procesos institucionales.
- Participar en foros, pronunciamientos colectivos y canales de diálogo intersectorial con organizaciones de la sociedad civil y órganos de control.

2. Desarrollar escenarios internos y planes de continuidad operativa

- Establecer comités internos de análisis de riesgos político-electorales y planes de contingencia diferenciados.
- Identificar los procesos críticos del negocio (logística, producción, comunicaciones, atención al cliente, etc.) y mapear los riesgos que podrían afectarlos.
- Diseñar protocolos específicos de respuesta ante distintos tipos de eventos: bloqueos, fallas en servicios públicos, restricciones a la movilidad, entre otros.



- Establecer canales de comunicación interna y externa que funcionen en situaciones de alta incertidumbre, para mantener informados a empleados, proveedores y clientes.
- Evaluar alternativas logísticas, proveedores redundantes o esquemas de operación remota, que puedan activarse en caso de que las condiciones locales lo exijan.

3. Fortalecer canales de comunicación con autoridades e instituciones electorales

- Mantener contacto directo y proactivo con autoridades locales y nacionales (Registraduría, CNE, gobernaciones, entre otros) para anticipar cambios normativos o tensiones institucionales.
- Explorar espacios de cooperación público-privada para reforzar la transparencia y la vigilancia ciudadana del proceso electoral.

4. Invertir en monitoreo reputacional, de redes sociales y desinformación

- Implementar sistemas de monitoreo de medios y redes sociales para identificar narrativas que puedan afectar el entorno de negocios, la seguridad o la imagen corporativa.
- Desarrollar protocolos de manejo de crisis comunicacional ante desinformación o polarización dirigida al sector privado.

5. Reforzar las capacidades de seguridad física y cibernética

- Revisar protocolos de seguridad para activos estratégicos, instalaciones y personal, especialmente en regiones con historial de violencia preelectoral.
- Proteger infraestructuras digitales y comunicaciones críticas ante posibles escenarios de agitación o ataques cibernéticos.

6. Construir relaciones sólidas con medios de comunicación confiables

- Fortalecer alianzas con medios y periodistas que promuevan el pluralismo, la verificación y el debate informado, contribuyendo a contrarrestar la desinformación y preservar un entorno democrático.





7. Diversificar riesgos regulatorios y contractuales

- Incluir cláusulas de adaptación ante cambios políticos, reformas abruptas o inestabilidad institucional en contratos clave.
- Reevaluar planes de inversión o expansión en función de señales tempranas que sugieran entornos más volátiles o judicializados.

8. Preparar posiciones coordinadas del sector empresarial en caso de crisis institucional

- Establecer canales de concertación empresarial (por ejemplo, vía gremios como ANDI o Fenalco) para emitir mensajes comunes en situaciones críticas, evitando reacciones dispersas o contradictorias.

Conclusiones

Colombia entra en una fase clave de su ciclo político. Las elecciones de 2026 no solo marcarán la renovación del poder ejecutivo y legislativo, sino que también pondrán a prueba la solidez de las instituciones democráticas en un entorno de polarización, desconfianza y tensiones persistentes.

Este informe busca ofrecer un marco estructurado para la comprensión del entorno electoral, la identificación de riesgos, y la construcción de rutas de anticipación. Al integrar herramientas como el análisis de hipótesis competidoras, la generación de escenarios y el diseño de alertas tempranas, se proporciona una base útil para que distintos actores —estatales, privados y sociales— puedan tomar decisiones informadas, responsables y adaptativas.

La incertidumbre no es un obstáculo para la acción estratégica; es su punto de partida. Frente a contextos complejos, la preparación diferenciada, la vigilancia activa del entorno y la coordinación multisectorial siguen siendo las mejores garantías para preservar la estabilidad institucional, proteger la integridad del proceso electoral y asegurar que la transición de poder, sea cual sea su resultado, se dé en el marco de las reglas democráticas.

